Los siguientes datos son testados en cumplimiento de los artículos 33 fracciones VI, XI y XX, 38 fracción I, 71, 72, 77 fracción XVIII, 117 fracción III y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por lo que se testan los siguientes datos.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Chihuahua, Chihuahua, a treinta de abril de dos mil veinticinco.

Resolución que pone fin al procedimiento de responsabilidad administrativa número **2024/OIC/PRA038**, instruido en contra del servidor público **Jesús José Portillo Rojas** que se emite con fundamento en los artículos 202 fracción V, 203, 205, 207 y demás relativos y aplicables de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

GLOSARIO

Constitución Federal	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Código de Ética	Código de Ética y Conducta para las personas servidoras públicas del Municipio de Chihuahua
IMM	Instituto Municipal de las Mujeres
Subdirección	Subdirección del H. Cuerpo de Bomberos y Rescate de la Dirección de Seguridad Pública Municipal del municipio de Chihuahua
IPRA	Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa
Ley General	Ley General de Responsabilidades Administrativas
OIC	Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua
PRA	Procedimiento de Responsabilidad Administrativa

El servidor público	Jesús José Portillo Rojas
[redacted]	[redacted]

ANTECEDENTES

1. **Radicación**. El veintitrés de abril de dos mil veinticuatro la autoridad investigadora del OIC radicó el expediente 2024/OIC/DE099 relativo a denuncia de hechos en contra de ***El servidor público.***

2. **Calificación.** Llevadas a cabo las diligencias de investigación que se estimaron pertinentes, el tres de octubre de dos mil veinticuatro, la autoridad investigadora consideró que el expediente se encontraba debidamente integrado y que no existían actos pendientes por desahogar, por lo que calificó la falta administrativa como no grave, acuerdo que se notificó al [redacted] y a [redacted] en calidad de denunciante.

3. **IPRA**. Mediante oficio número OIC/AI/753/2024 recibido en fecha siete de octubre de dos mil veinticuatro, la persona Titular del Área Investigadora del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua remitió al Área de Responsabilidades *IPRA,* así como original del expediente número 2024/OIC/DE099, constante de cien (100) fojas.

4. **Admisión.** El día nueve de octubre de dos mil veinticuatro, se radicó el *IPRA*, registrándose ante esta Área de Responsabilidades el expediente **2024/OIC/PRA038**, y el diez de octubre de dos mil veinticuatro se dictó Acuerdo de admisión en el que se ordenó emplazar al presunto responsable.

Los siguientes datos son testados en cumplimiento de los artículos 33 fracciones VI, XI y XX, 38 fracción I, 71, 72, 77 fracción XVIII, 117 fracción III y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por lo que se testan los siguientes datos.

5. **Medidas cautelares.** Al presentar su *IPRA*, la autoridad investigadora no estimó necesaria la solicitud de medidas cautelares.

6. **Emplazamiento**. En fecha quince de octubre de dos mil veinticuatro se realiza emplazamiento por cédula de notificación personal a ***El servidor público*** en el domicilio proporcionado por la autoridad investigadora, entregando oficio de emplazamiento OIC/AR/433/2024, en el que se señaló la fecha y hora para la celebración de audiencia inicial.

7. **Audiencia inicial.** En fecha cuatro de noviembre de dos mil veinticuatro, se lleva a cabo audiencia inicial a la cual comparece ***El servidor público***, se hace acompañar de su defensor particular, y acude también representación de la autoridad investigadora y de las partes denunciantes.

8. **Admisión, desahogo de pruebas.** En fecha trece de febrero se suscribió acuerdo en donde habiendo concluido el desahogo de pruebas, se decretó la apertura del periodo de alegatos para las partes.

9. **Cierre de Instrucción.** Mediante acuerdo de fecha diez de marzo de dos mil veinticinco, se decretó el cierre de instrucción para emitir la presente resolución, el cual, fue notificado a todas las partes.

C O N S I D E R A C I O N E S

PRIMERA. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.

Los siguientes datos son testados en cumplimiento de los artículos 33 fracciones VI, XI y XX, 38 fracción I, 71, 72, 77 fracción XVIII, 117 fracción III y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por lo que se testan los siguientes datos.

Esta Área de Responsabilidades, es competente para conocer y resolver el presente *PRA*, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 14, primer párrafo, 16, primer párrafo, 109, fracción III, párrafos primero, segundo y sexto de *la Constitución Federal*; 178, fracción III, párrafos primero y tercero de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 1, 3, fracción IV y XV, 9, fracción II, 10, párrafo segundo, 111, 202 fracción V, 203, 205, 207 y 208, fracción X de la *Ley General*; artículos 28, fracción X, 101, fracción III, y 101, bis fracción III, numerales 1 y 4 del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua, así como por lo previsto en el artículo 44 de los Lineamientos que Regulan el Procedimiento de Responsabilidades Administrativas ante el Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua, toda vez que el mismo versa sobre una conducta infractora que no está catalogada como grave.

SEGUNDA. - TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y DEBIDO PROCESO

En este apartado se verificará que el derecho al debido proceso y las formalidades esenciales del procedimiento hayan sido debidamente garantizadas en el PRA en estudio.

Sobre el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 47/95, de rubro **"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO"**, expone claramente los elementos que integran el concepto de "formalidades esenciales del procedimiento", los que deben respetarse a fin de cumplir con la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión de las partes:

1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias;

Los siguientes datos son testados en cumplimiento de los artículos 33 fracciones VI, XI y XX, 38 fracción I, 71, 72, 77 fracción XVIII, 117 fracción III y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por lo que se testan los siguientes datos.

Órgano Interno de Control
Calle Gómez Farías, No. 212, Col. Centro C.P. 31000 Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 (614)200 48 00 I municipiochihuahua.gob.mx

2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa;

3) La oportunidad de alegar; y

4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas, que es evitar la indefensión del afectado".

Ahora bien, si la primera formalidad esencial de todo procedimiento es que la parte afectada sea llamada ante el órgano de autoridad a fin de que pueda defenderse correctamente; el ser llamado no solamente comprende la posibilidad de que el particular sea emplazado de que existe un procedimiento que pudiera culminar con la emisión de un acto privativo, sino que — de forma más amplia — exige poner a su disposición todos los elementos que le permitan tener una noticia completa del hecho que se le imputa.

Entonces, la finalidad de ser emplazado estriba precisamente en la oportunidad de ofrecer pruebas y de que éstas sean desahogadas. De igual modo, las partes deben tener el derecho de ofrecer alegatos y de que estos sean tomados en cuenta por la instancia resolutora, para que ésta, finalmente, dicte una resolución en la que dirima las cuestiones planteadas.

Atendiendo a lo anterior, y respecto a lo establecido por los artículos 7, fracción VII, en relación con el 111 de la *Ley General*, al ser deber de esta autoridad proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en la Norma Fundamental, especialmente el debido proceso para las partes, corresponde a esta instancia llevar a cabo el análisis integral de la tramitación del *PRA*, para primeramente, verificar que la substanciación del procedimiento se haya realizado conforme a las formas y tiempos previstos en la *Ley General*.

Los siguientes datos son testados en cumplimiento de los artículos 33 fracciones VI, XI y XX, 38 fracción I, 71, 72, 77 fracción XVIII, 117 fracción III y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por lo que se testan los siguientes datos.

Órgano Interno de Control
Calle Gómez Farías, No. 212, Col. Centro C.P. 31000 Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 (614)200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx

Bajo este contexto, de las constancias se advierte que el señalado como presunto responsable fue debidamente emplazado, ya que la autoridad substanciadora practicó la diligencia de emplazamiento el día veintiocho de abril de dos mil veintitrés y, según consta en la diligencia de notificación se puso a disposición del presunto responsable copia certificada del expediente de investigación y sus anexos, el *IPRA*, las pruebas aportadas en el mismo, así como el acuerdos de admisión y recepción dictados por la autoridad substanciadora, documentos a través de los cuales se le hizo de conocimiento de manera detallada y precisa los hechos imputados, además, se le hizo saber el derecho de no declarar en contra de sí mismo, ni a declararse culpable; de defenderse personalmente o ser asistido por un defensor perito en la materia y que, de no contar con uno, le sería nombrado de oficio.

Así también, con la anticipación prevista en el artículo 208, fracción IV de la Ley General, se citó a quienes de conformidad con el artículo 116 de la misma ley tienen el carácter de parte en el presente asunto, esto, para que concurrieran a la audiencia inicial, a la que el señalado como presunto responsable acudió y designó un defensor perito en la materia, mismo que señaló domicilio para recibir notificaciones en su nombre, realizando manifestaciones de manera escrita y se les dio oportunidad de ofrecer pruebas, las que fueron debidamente admitidas y desahogadas.

Una vez desahogadas todas las pruebas ofrecidas, y al no existir diligencias pendientes para mejor proveer, se declaró abierto el periodo de alegatos, actos que se notificaron a todas las partes, de conformidad con la *Ley General*.

Los siguientes datos son testados en cumplimiento de los artículos 33 fracciones VI, XI y XX, 38 fracción I, 71, 72, 77 fracción XVIII, 117 fracción III y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por lo que se testan los siguientes datos.

Los siguientes datos son testados en cumplimiento de los artículos 33 fracciones VI, XI y XX, 38 fracción I, 71, 72, 77 fracción XVIII, 117 fracción III y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por lo que se testan los siguientes datos.

Finalmente, se dictó acuerdo en el que se dio cuenta de las partes que expresaron alegatos y se decretó el cierre de la instrucción turnando los autos para dictar resolución, mismo que se notificó a las partes.

Por consiguiente, resulta claro que en el presente *PRA* fueron debidamente garantizadas las formalidades esenciales del procedimiento, al velarse por el derecho de defensa en su vertiente probatoria, con igualdad para todas las partes.

TERCERA. – CASO CONCRETO

I. Hechos Atribuidos.

Acorde al Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, agregado al expediente de investigación número **2024/OIC/DE099,** los hechos que se le atribuyen a ***El servidor público*** son los siguientes:

> *"el veintiséis de marzo de dos mil veinticuatro en la estación de bomberos número uno, ubicada en la calle Cuarta y Urquidi, de la Colonia Santa Rosa en esta ciudad de Chihuahua,* [redacted] *se encontraba agachada revisando una caja de archivo, cuando JESÚS JOSÉ PORTILLO ROJAS se le acercó y la golpeó en la parte de sus glúteos con un folder (carpeta) que traía en su mano.*
> *Después de dicha acción* [redacted] *se dirigió a JESÚS JOSÉ PORTILLO ROJAS con un gesto de molestia, a lo cual JESÚS JOSÉ PORTILLO ROJAS reaccionó con una disculpa.*

II. Falta imputada

En atención a los hechos expuestos, en su *IPRA* la Autoridad investigadora imputa a ***El servidor público,*** la falta prevista en el artículo 49, fracción I[1], de la *Ley General*,

[1] Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:

al considerar que con los hechos narrados fue omiso en observar respeto hacia su compañera en el desempeño de sus funciones en perjuicio de [redacted] así como el Código de Ética y Conducta de las Personas Servidoras Públicas del Municipio de Chihuahua, al haber incurrido en actos de violencia en contra de una mujer.

III. Marco doctrinal y jurídico

Dado que los hechos materia del presente asunto, versan sobre conductas cometidas por una persona de sexo hombre que constituyen violencia en contra de una servidora pública mujer, el estudio del presente asunto requiere un abordaje especializado en materia de perspectiva de género, por lo que a lo largo de la presente resolución se tomará en cuenta lo dispuesto por el *Protocolo*[2].

En primer término, se debe destacar que la presente resolución se emite en apego al marco constitucional y convencional, al observarse a cabalidad el artículo primero constitucional, mismo que obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, ente los que se encuentra el igualdad entre el hombre y la mujer previsto en el artículo 4 constitucional, por lo que al versar la materia del procedimiento en que se actúa sobre actos de violencia en contra de mujeres se actualiza el deber de juzgar con perspectiva de género.

La necesidad de incorporar este método de análisis para los casos en los que el género se configura como un factor determinante en la toma de decisiones, deriva del irrestricto respeto al derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad y sin discriminación, el cual permite tutelar y hacer efectivos el resto de derechos a

---

I. Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás Servidores Públicos como a los particulares con los que llegare a tratar, en los términos que se establezcan en el código de ética a que se refiere el artículo 16 de esta Ley;

[2] Nueva versión del Protocolo para juzgar con perspectiva de género, a cargo de la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, primera edición 2020, visible en https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/protocolos-de-actuacion/para-juzgar-con-perspectiva-de-genero.

favor de las personas, tales como el derecho a la igualdad y la no discriminación, el de las mujeres a una vida libre de violencia, entre otros.

La perspectiva de género, se trata, en esencia, de un conjunto de cuestiones mínimas que se deben tener presentes para identificar el impacto diferenciado que puede producir la categoría del género en los distintos aspectos de la controversia.

Es decir, su cumplimiento exige la aplicación de una metodología centrada en la necesidad de detectar posibles situaciones de desequilibrio de poder entre las partes –mas no necesariamente presentes– como consecuencia de su género, seguida de un deber de cuestionar la neutralidad de las pruebas y el marco normativo aplicable, así como de recopilar las pruebas necesarias para visualizar el contexto de violencia o discriminación.

Al respecto, la Suprema Corte ha identificado en la jurisprudencia 1a./J. 22/2016[3], seis elementos que pueden resumirse en:

a) La necesidad de detectar posibles —más no necesariamente presentes— situaciones de desequilibrio de poder entre las partes como consecuencia de su género;

b) Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género;

c) Recopilar las pruebas necesarias para visualizar el contexto de violencia o discriminación;

d) Un deber de cuestionar la neutralidad de las pruebas y el marco normativo aplicable;

Los siguientes datos son testados en cumplimiento de los artículos 33 fracciones VI, XI y XX, 38 fracción I, 71, 72, 77 fracción XVIII, 117 fracción III y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por lo que se testan los siguientes datos.

[3] De rubro ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

e) Aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, y finalmente;

f) Evitar la utilización de lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, y, a su vez, procurar el uso de lenguaje incluyente.

Ahora bien, en el ámbito convencional debe destacarse lo previsto por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer "Convención de Belém do Pará", la que prevé lo que se entiende por violencia contra la mujer, los tipos de violencia, el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia, así como las obligaciones de los estados parte, entre las que se encuentra la relativa a adoptar políticas y mecanismos orientados a prevenir y erradicar la violencia.

En esta tesitura, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, retoma conceptos y principios relativos al rubro de la violencia, mientras que es la Ley General la que dispone que las personas servidoras públicas deben actuar conforme a los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, entre otros, que rigen la función pública.

Finalmente, se destaca que la aplicación de la perspectiva de género en el presente asunto no se traduce en el deber de resolver el fondo conforme a las pretensiones ante el Instituto Municipal de las Mujeres[4], sino practicar el estudio y análisis de los hechos imputados, los argumentos de defensa y el acervo probatorio a la luz de las consideraciones anteriores, con los matices que deben operar para cada caso.

Se afirma lo anterior, ya que si bien es cierto ambos versan sobre violencia psicológica y violencia física, por lo que varían las reglas de valoración probatoria como se explicará más adelante.

[4] PERSPECTIVA DE GÉNERO. LA OBLIGACIÓN DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE JUZGAR BAJO DICHO PRINCIPIO, NO SIGNIFICA QUE DEBAN RESOLVER EL FONDO DEL ASUNTO CONFORME A LAS PRETENSIONES PLANTEADAS POR LAS O LOS GOBERNADOS.

Los siguientes datos son testados en cumplimiento de los artículos 33 fracciones VI, XI y XX, 38 fracción I, 71, 72, 77 fracción XVIII, 117 fracción III y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por lo que se testan los siguientes datos.

Realizadas las precisiones anteriores, se procede a analizar los diversos elementos probatorios que obran en el expediente.

CUARTA. CAUDAL PROBATORIO

En este apartado se procederá a enunciar los medios de prueba que fueron admitidos y desahogados, dentro del expediente que se resuelve, se anunciarán las reglas de valoración probatoria, para luego fijar el grado de convicción que cada una de ellas produce.

A. Pruebas de la autoridad investigadora

1 .- La documental pública, consistente copia certificada del Nombramiento de Portillo Rojas Jesús José de fecha catorce de agosto de dos mil veintitrés, en el que se establece el alta de Portillo Rojas Jesús José en fecha primero de enero de dos mil nueve, como servidor público, Bombero 2° adscrito a la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Chihuahua (Foja 61), a efecto de acreditar la calidad de servidor público.

2.- La documental pública, consistente en copia certificada de Formato Único de Conocimiento del Caso realizado por [redacted], de fecha veintisiete de marzo de dos mil veinticuatro, con folio 5725 remitido por el Instituto Municipal de las Mujeres (Fojas 7 a 33), relacionado a los hechos detallados en el apartado "VI. La infracción que se imputa al señalado como presunto responsable, señalando con claridad las razones por las que se considera que ha cometido la falta." de la presente pieza de autos en referentes a la falta de respeto, abuso sexual y laboral de que fue víctima [redacted] por parte de Portillo Rojas Jesús José a fin de acreditar la comisión de la falta administrativa y la presunta responsabilidad.

3.- La documental pública, consistente en acta circunstanciada de fecha veinticuatro de mayo de dos mil veinticuatro, mediante el cual [redacted] realizó una serie de manifestaciones tomadas como indicios, en relación a la conducta de abuso sexual y laboral del servidor público Portillo Rojas Jesús José en contra de [redacted] (foja 51) a fin de acreditar la comisión de la falta administrativa y la presunta responsabilidad

B. Pruebas de los terceros.

1. Documental Pública. Consistente en copia certificada del expediente 10s. 1.20.172/2024 tramitado dentro de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Probanza que acredita los hechos de violencia señalados en el presente proceso, la afectación emocional derivado a las represalias que la suscrita he sido víctima con motivo de la presente investigación y declaraciones de diversos testigos.

2. Documental Pública. Consistente en copia certificada de la carpeta de investigación con Número Único de Caso 19-2024-0008345 presentada en fecha dieciocho de abril de dos mil veinticuatro ante la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas Del Delito Por Razones De Género por el delito de abuso sexual.

3. Documental Pública. Consistente en Receta Alterna de fecha dieciocho de julio de dos mil veinticuatro.

C. Pruebas de la defensa del presunto responsable.

1. Testimonial de [redacted].

Los siguientes datos son testados en cumplimiento de los artículos 33 fracciones VI, XI y XX, 38 fracción I, 71, 72, 77 fracción XVIII, 117 fracción III y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por lo que se testan los siguientes datos.

D. Diligencias para mejor proveer.

1. Comparecencia de [redacted].

IV. Reglas de valoración probatoria

La *Ley General* establece en su artículo 130 que para conocer la verdad de los hechos la autoridad resolutora podrá valerse de cualquier persona o documento, sin más limitación que la de que las pruebas hayan sido obtenidas lícitamente y con pleno respeto a los derechos humanos, estando únicamente excluida la confesional a cargo de las partes por absolución de posiciones.

Esa misma normativa señala que las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, mientras que los artículos 133, 134 y 165 de la *Ley General* disponen las reglas para la valoración de la prueba, estableciendo que las documentales emitidas por las autoridades en ejercicio de sus funciones tendrán valor probatorio pleno por lo que respecta a su autenticidad o a la veracidad de los hechos a los que se refieran, salvo prueba en contrario.

Las documentales privadas, las testimoniales, las inspecciones y las periciales y demás medios de prueba lícitos que se ofrezcan por las partes, solo harán prueba plena cuando a juicio de la Autoridad resolutora del asunto resulten fiables y coherentes de acuerdo con la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí, de forma tal que generen convicción sobre la veracidad de los hechos.

Por su parte, la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, será valorada atendiendo a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada

y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta.

De conformidad con el artículo 161 de la *Ley General* los documentos privados se presentarán en original, y, cuando formen parte de un expediente o legajo, se exhibirán para que se compulse la parte que señalen los interesados, advirtiéndose que en el expediente en que se actúa las probanzas que fueron ofrecidas y admitidas como documentales privados no cuentan con dicho carácter, al haberse exhibido en copia simple.

En ese sentido, debe hacerse hincapié en que, por regla general, las copias simples de cualquier documento, por sí mismas, no tienen fuerza de convicción, en virtud de que no existe la certeza de que su contenido coincida con su original. Empero, dichas copias simples pueden tener fuerza de convicción, cuando en autos existen elementos suficientes para evidenciar que corresponden a su original.

Al respecto, se debe tener presente que la mayor o menor fuerza de convicción que produzcan (las copias simples) depende de que existan o no elementos con los cuales puedan ser adminiculadas para verificar su autenticidad. Esto es, las copias simples, por sí solas, constituyen solamente un indicio, cuyo valor puede incrementarse en la medida en que existan otros elementos que corroboren su autenticidad, o bien, puede decrecer con la existencia y calidad de elementos que contradigan esa autenticidad.

Por otro lado, los artículos 138 y 141 de la *Ley General* dispone que no serán objeto de prueba: el derecho y los hechos notorios, pudiendo la autoridad que resuelva referirse a ellos aun cuando las partes no los hubieren mencionado.

Los siguientes datos son testados en cumplimiento de los artículos 33 fracciones VI, XI y XX, 38 fracción I, 71, 72, 77 fracción XVIII, 117 fracción III y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por lo que se testan los siguientes datos.

Los siguientes datos son testados en cumplimiento de los artículos 33 fracciones VI, XI y XX, 38 fracción I, 71, 72, 77 fracción XVIII, 117 fracción III y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por lo que se testan los siguientes datos.

Además, derivado de que el presente asunto versa sobre actos de violencia cometidos en contra de la mujer y, por tanto, se juzga con perspectiva de género es de destacarse que es necesario utilizar un estándar probatorio idóneo para la atención de este tipo de casos, tal como lo dispone el *Protocolo*, sin dejar de lado los principios de legalidad, presunción de inocencia, imparcialidad, objetividad, congruencia, exhaustividad, verdad material y respeto a los derechos humanos que rigen el presente procedimiento.

Al respecto, debe destacarse el artículo 135 de la *Ley General*, mismo que establece que los medios de prueba y su valoración deben ser considerados de tal modo que generen como resultado un estándar de prueba suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia en favor de los presuntos responsables de faltas administrativas.

Sobre esas premisas, así como atendiendo a la legislación supletoria de primer y segundo orden, se procederá a valorar las pruebas, diligencias y constancias que obran en el expediente, dentro del apartado siguiente.

2. Valoración probatoria

La autoridad investigadora ofreció un total de tres documentales públicas las cuales fueron obtenidas en acato a las disposiciones legales vigentes, sin vulneración de derechos humanos y dan cuanta de hechos que funcionarios públicos en ejercicio y con motivo de sus funciones asentaron como ciertos.

La primera de ellas brinda certeza de que ***El servidor público*** se desempeña como servidor público del municipio de Chihuahua, a la que se le concede valor probatorio pleno en cuanto al objeto que pretende acreditar, al ser una documental pública expedida por la autoridad competente y la cual es la encargada para realizar y

resguardar el tramite de alta y baja de los servidores públicos en relación a la administración centralizada del Gobierno Municipal de Chihuahua.

La segunda de ellas da cuenta de la denuncia presentada ante el ***IMM***, relatando hechos que resultan constitutivos de la materia del procedimiento, a saber, con folio 5725 remitido por el Instituto Municipal de las Mujeres (Fojas 7 a 33), relacionado a los hechos detallados en el apartado, señalando con claridad las razones por las que se considera que ha cometido la falta "*de la presente pieza de autos en referentes a la falta de respeto, abuso sexual y laboral de que fue víctima* [redacted] *por parte de Portillo Rojas Jesús José*".

Tanto dicha documental, como la tercer prueba aportada por la autoridad investigadora, consistente en el acta circunstanciada de fecha veinticuatro de mayo de dos mil veinticuatro, en la que [redacted] realizó una serie de manifestaciones respecto a los hechos en cuestión, se les otorga valor probatorio indiciario, esto, al versar sobre manifestaciones verbales respecto a los actos en cuestión.

Ahora bien, atendiendo a la naturaleza de la conducta, es decir, de índole sexual, la declaración de la víctima cuenta con valor preponderante, no obstante, se debe analizar en conjunto con otros elementos de convicción que obren en el expediente.

No obstante, dada la naturaleza de los hechos materia del presente asunto, los cuales implican violencia en contra de una mujer, su valoración debe realizarse con perspectiva de género a fin de evitar afirmaciones, insinuaciones y alusiones estereotipadas, que generen una inadecuada valoración que reste credibilidad a la

Los siguientes datos son testados en cumplimiento de los artículos 33 fracciones VI, XI y XX, 38 fracción I, 71, 72, 77 fracción XVIII, 117 fracción III y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por lo que se testan los siguientes datos.

Órgano Interno de Control
Calle Gómez Farías, No. 212, Col. Centro C.P 31000 Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 (614)200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx

Los siguientes datos son testados en cumplimiento de los artículos 33 fracciones VI, XI y XX, 38 fracción I, 71, 72, 77 fracción XVIII, 117 fracción III y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por lo que se testan los siguientes datos.

versión de las víctimas, por lo que deben aplicarse como reglas de valoración[5] las siguientes:

a) Dado que generalmente los actos de violencia en contra de la mujer se producen en ausencia de otras personas más allá de la víctima y la persona o personas agresoras, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho.

b) al analizarse la declaración de la víctima se debe tomar en cuenta que las agresiones sexuales corresponden a un tipo de conducta que la víctima no suele denunciar por el estigma que dicha situación conlleva usualmente;

c) se debe tener en cuenta la naturaleza traumática de los actos de violencia sexual. En razón de ello se debe entender que es usual que el recuento de los hechos pueda presentar algunas inconsistencias o variaciones en cada oportunidad que se solicita realizarlo;

d) Se deben tomar en cuenta algunos elementos subjetivos de la víctima, como su edad, condición social, pertenencia a un grupo vulnerable o históricamente discriminado, entre otros;

e) se debe analizar la declaración de la víctima en conjunto con otros elementos de convicción, recordando que la misma es la prueba fundamental. Entre esos otros

[5] Criterios sostenidos por la Corte IDH, al resolver los casos Fernández Ortega y Rosendo Cantú, así como por el Pleno de la Suprema Corte en la tesis P. XXIII/2015, y por la Primera Sala en la Tesis CLXXXIV/2017 identificada bajo el rubro: VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA MUJER. REGLAS PARA LA VALORACIÓN DE SU TESTIMONIO COMO VÍCTIMA DEL DELITO.

elementos se pueden encontrar dictámenes médicos psiquiátricos, testimonios, examinaciones médicas, pruebas circunstanciales, indicios y presunciones; y

f) las pruebas circunstanciales, indicios y presunciones, deben ser utilizadas como medios de prueba siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos.

Será bajo estas premisas que se practicará el análisis probatorio, las cuales, se insiste, no resultan únicamente aplicables a los casos de violación sexual, sino que, a la luz de los criterios citados, es obligación de toda autoridad resolutora aplicar dichas reglas a la **totalidad de los casos que involucren algún tipo de violencia contra la mujer**, como lo es el caso concreto.

Debiéndose destacar en este punto que, al tratarse de las propias manifestaciones de la víctima, estas pruebas son fundamentales, al tratarse, en los casos de violencia, de uno de los indicios —generalmente, el principal, por cuanto puede ser el que aporte un mayor número de datos respecto de los hechos— no obstante, su valor probatorio se condiciona a la existencia de otro u otros elementos indiciarios provenientes de otras fuentes —no dependientes de dicha declaración— que apunten en la misma dirección.

Lo anterior, sin dejar de considerar que los medios de prueba y su valoración deben generar como resultado un estándar de prueba suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia en favor de los presuntos responsables de faltas administrativas, contemplada en el artículo 135 de la *Ley General.*

Los siguientes datos son testados en cumplimiento de los artículos 33 fracciones VI, XI y XX, 38 fracción I, 71, 72, 77 fracción XVIII, 117 fracción III y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por lo que se testan los siguientes datos.

Respecto a las pruebas aportadas por los terceros dentro del procedimiento, las cuales se encuentran señaladas en el apartado II, de la consideración Cuarta, se les concede valor probatorio indiciario a las señaladas en los incisos a) y b).

En cuanto a la señalada en el apartado c), aun y cuando fue admitida dentro de la substanciación del procedimiento, esta no se encuentra relacionada con la acreditación de los actos imputados a ***El servidor público***, dado que la falta que se señala, fue calificada como no grave, siendo la contemplada en el articulo 49, fracción I de la ***Ley General***, por lo cual se encuentra en análisis la violación al código de ética y principios que rigen el servicio público por parte de ***El servidor público***, y no el resultado que se llegase a generar o no.

Bajo este contexto, dicha probanza carece de trascendencia para la materia del procedimiento que se resuelve, pues por la naturaleza de la falta imputada, basta se lesione el ejercicio de la función pública, ante el incumplimiento de observar el Código de Ética, como en el caso aconteció.

Lo anterior se afirma, ya que en el derecho disciplinario se avala la formulación de infracciones por la mera inobservancia de los mandatos establecidos, es decir, abarca las infracciones administrativas de peligro abstracto y hasta presunto, estadístico o total, por lo que, resulta irrelevante el resultado de las mismas.

En consecuencia, la probanza en cuestión, carece de relevancia y valor probatorio respecto a la falta imputada, al no tener relación con la acreditación de la inobservancia a las disposiciones legales por parte de ***El servidor público.***

Los siguientes datos son testados en cumplimiento de los artículos 33 fracciones VI, XI y XX, 38 fracción I, 71, 72, 77 fracción XVIII, 117 fracción III y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por lo que se testan los siguientes datos.

En cuanto a la diligencia para mejor proveer señalada en el apartado IV, de la consideración Cuarta, se le concede valor probatorio indiciario, al referir la apreciación de los hechos de manera verbal por parte de un testigo.

Con base en el método de valoración de pruebas expuesto, esta Autoridad resolutora dejará a salvo los principios que rigen los procedimientos de responsabilidad administrativa, es decir, de legalidad, presunción de inocencia, imparcialidad, objetividad, congruencia, exhaustividad, verdad material y respeto a los derechos humanos, ello, sin perder de vista que se está frente a un asunto que involucra actos de violencia en contra de una mujer, lo que hace necesario utilizar también el estándar probatorio idóneo para la atención de estos casos, como el contenido en el *Protocolo*, cuya observancia implica, precisamente, atender el principio de respeto a los derechos humanos.

QUINTA. – ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS

Lo que procede es determinar, si, con las constancias que integran el expediente, se acredita la existencia de los hechos que se le atribuyen a ***El servidor público***, los que se pueden resumir de la siguiente manera:

- En ejercicio de sus funciones, golpeó y/o tocó con una carpeta a [redacted] en la zona de los glúteos.

Al respecto, se comenzará con el análisis de los hechos relativos atendiendo a las reglas de valoración anunciadas en la consideración anterior.

Para acreditar que el servidor público golpeó y/o tocó con una carpeta a [redacted] en la zona de los glúteos, por parte de la autoridad investigadora se tiene en consideración:

Los siguientes datos son testados en cumplimiento de los artículos 33 fracciones VI, XI y XX, 38 fracción I, 71, 72, 77 fracción XVIII, 117 fracción III y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por lo que se testan los siguientes datos.

- Comparecencia inicial de [redacted], ante el ***IMM***, de fecha veintisiete de marzo de dos mil veinticuatro, con folio 5725 remitido por el Instituto Municipal de las Mujeres, en la que se expresa:

"*…estaba en la oficina del Coordinador de Logística,* [redacted], *estaba agachada, revisando una caja de archivo, cuando llegó el bombero segundo Jesús José Portillo Rojas y me pegó tres veces en las pompis con una carpeta que él traía. Me enderecé y volteé a verlo con cara de enojo y molestia. Jesús José me dice: que no fue su intención, de hecho, te pegué con la carpeta, ni siquiera fue con la mano… … Yo le dije a Jesús José: claro que senti que fue con una carpeta, sin embargo, no me debiste de haber golpeado y si hubiera sido con la mano, créeme que te hubiera dado un chingadazo. También estaba presente el Bombero segundo* [redacted], *desconozco si quiera hablar sobre lo sucedido porque él es subordinado de* [redacted]*…*

…Posteriormente, Jesús José me dijo: "Discúlpame [redacted]*, te confundi con* [redacted]*. Discúlpame". Y él mismo. le llamó a mi jefe,* [redacted] *y le dijo: "que la había regado con* [redacted]*, que se habia confundido con* [redacted] *y por eso me había pegado con la carpeta…".*

Lo que, como ya se señaló con anterioridad, es la prueba fundamental y se debe analizar en conjunto con otros elementos de convicción, tales como dictámenes médicos psiquiátricos, testimonios, examinaciones médicas, pruebas circunstanciales, indicios y presunciones recordando.

- Acta administrativa de la comparecencia del C. [redacted] realizó una serie de manifestaciones en relación a la conducta de abuso sexual y laboral de ***El servidor público*** en contra de [redacted], en donde manifiesta:

Los siguientes datos son testados en cumplimiento de los artículos 33 fracciones VI, XI y XX, 38 fracción I, 71, 72, 77 fracción XVIII, 117 fracción III y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por lo que se testan los siguientes datos.

"… el 26 de marzo del 2024, aproximadamente a las 09:00 am yo me encontraba en mi oficina…

Hablando por teléfono con el compañero Jesús José Portillo Rojas, quien se encontraba físicamente en calle Cuarta y Urquidi colonia santa rosa, estación de bomberos …

…en el momento de llevar a cabo la conversación me dijo, " espérame te regreso la llamada en un rato porque ya la regué"…

…transcurrieron aproximadamente 15 minutos cuando el compañero portillo me regresa la llamada y me comenta lo sucedido, me comento que confundió a la compañera [redacted] *y que con un folder le había pegado en las pompis, que el reconoció que la había regado…*

… [redacted] *quien me coment que se encontraba agachada en el área del archivo buscando un expediente y que el compañero Jesús José Portillo Rojas le pego en las pompis con un folder…"* (Sic)

Aunque la defensa pretende invalidar esta probanza, al señalarla como testimonial de oídas, al adminicularla con la narrativa de [redacted] y los elementos probatorios reseñados en la presente resolución, esta autoridad afirma la relevancia, valor y nexo de la misma al procedimiento que se resuelve.

De las transcripciones anteriores, se advierte que [redacted] narró ante autoridades distintas (el ***IMM***, la Comisión Estatal de Derechos Humanos – a foja 136 - y su Superior Jerárquico) hechos similares que involucran a la misma persona, se dan a conocer circunstancias que, aunque no sean del todo coincidentes, al tener variaciones y/o imprecisiones, ello no obsta para que sean tomadas como válidas, esto de acuerdo a los parámetros de valoración de la prueba, aplicables en el caso concreto, referidos en el apartado de valoración probatoria de la presente resolución:

Los siguientes datos son testados en cumplimiento de los artículos 33 fracciones VI, XI y XX, 38 fracción I, 71, 72, 77 fracción XVIII, 117 fracción III y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por lo que se testan los siguientes datos.

Los siguientes datos son testados en cumplimiento de los artículos 33 fracciones VI, XI y XX, 38 fracción I, 71, 72, 77 fracción XVIII, 117 fracción III y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por lo que se testan los siguientes datos.

c) *se debe tener en cuenta la naturaleza traumática de los actos de violencia sexual. En razón de ello se debe entender que es usual que el recuento de los hechos pueda presentar* ***algunas inconsistencias o variaciones*** *en cada oportunidad que se solicita realizarlo;*

Además, la declaración de la víctima se debe analizar en conjunto con otros elementos de convicción que obran dentro del expediente, por lo que no solo se cuenta con el dicho de la denunciante ante el ***IMM***, así como ante su superior jerárquico, manifestado en las documentales ya citadas, sino que éste se corrobora y es consistente con los señalados en las comparecencias ante la autoridad investigadora, los cuales refieren similitud en circunstancias, modo, tiempo y lugar de la conducta imputada, al identificar la presencia de ***El servidor público*** de manera física, el ingreso del mismo mientras se encontraba hablando por teléfono, señalando que este cargaba con "unas carpetas" en su mano, así como la reacción que tuvo [redacted] en dicho momento, en todas refiriendo el haber manifestado su inconformidad con la acción de ***El servidor público*** y expresarse con palabras altisonantes.

A foja 053 de los autos del expediente de investigación, se localiza acta circunstanciada de la comparecencia del C. [redacted] ante la autoridad investigadora en fecha veinticuatro de mayo de dos mil veinticuatro, en la cual manifiesta:

"*…, el 26 de marzo de 2024, aproximadamente a las 09:00 am me encontraba recogiendo reportes de daños de herramientas en la estación de bomberos 1 ubicada en la calle cuarta y Urquidi con el compañero* [redacted] *…*

…recuerdo que [redacted] *se encontraba platicando con* [redacted] *sobre unas carpetas del archivo muerto, cando entro el*

compañero Jesús José Portillo Rojas quien iba hablando por teléfono con unas carpetas en la mano, paso a un costado de [redacted] *sin embargo yo no advertí que le pegara, incluso ni que la rozara, me percate de que algo pasaba pues la compañera* [redacted] *comenzó a alterarse demasiado incluso hasta palabras altisonantes dijo…"* (Sic)

Aunado a lo anterior, dichas circunstancias, lugar, modo y consecuencias narradas también son consistentes con la testimonial desahogada ante esta autoridad el dieciocho de diciembre de dos mil veinticuatro, prueba la cual fue ofrecida por parte de la defensa de ***El servidor público***, en la cual, el C. [redacted] manifestó:

" *… 4- Sabe usted por que esta aquí?*

-Si

5- Me puede decir por que?

Vengo como testigo del hecho ocurrido

6- me puede aclarar cual hecho?

- El hecho de que acusaron a mi compañero de golpear a mi otra compañera con una carpeta…

… 9- nos puede platicar que paso?

- Claro que si, estábamos en la oficina, hay dos pequeños escritorios asi al frente, yo estaba sentado frente a uno, mi compañero [redacted] *estaba parado a un costado, estaban checando una caja de archivo, la compañera estaba agachada pegado hacia la puerta, en el otro escritorio se encontraba otra compañera, la compañera* [redacted] *estábamos todos reunidos ahí, cuando entro el compañero jesus portillo hablando por teléfono y con un folder debajo del brazo, paso a un costado de la compañera* [redacted] *y estábamos platicando ahí todos, se levanto expresándose bastante mal que si por que había hecho eso, diciendo varios disparates…"* (Sic)

Los siguientes datos son testados en cumplimiento de los artículos 33 fracciones VI, XI y XX, 38 fracción I, 71, 72, 77 fracción XVIII, 117 fracción III y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por lo que se testan los siguientes datos.

Los siguientes datos son testados en cumplimiento de los artículos 33 fracciones VI, XI y XX, 38 fracción I, 71, 72, 77 fracción XVIII, 117 fracción III y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por lo que se testan los siguientes datos.

En esta tesitura, si bien a las diversas probanzas se les dio el valor de indicio en lo individual; en su conjunto y al analizarlas a la luz del resto de las constancias que obran en el sumario que se resuelve, forman convicción mediante la integración de la prueba circunstancial.

Al respecto resulta aplicable, *mutatis mutandis* la tesis *CCLXXXIV/2013,* emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2004756, cuyo tenor literal es el siguiente:

> ***PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS INDICIOS PARA QUE LA MISMA SE PUEDA ACTUALIZAR.*** *A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si bien es posible sostener la responsabilidad penal de una persona a través de la prueba indiciaria o circunstancial, lo cierto es que deben concurrir diversos requisitos para que la misma se estime actualizada, pues de lo contrario existiría una vulneración al principio de presunción de inocencia. Así las cosas, en relación con los requisitos que deben concurrir para la debida actualización de la prueba indiciaria o circunstancial, los mismos se refieren a dos elementos fundamentales: los indicios y la inferencia lógica. Por lo que hace a los indicios, debe señalarse que los mismos deben cumplir con cuatro requisitos: a) deben estar acreditados mediante pruebas directas, esto es, los indicios deben encontrarse corroborados por algún medio de convicción pues, de lo contrario, las inferencias lógicas carecerían de cualquier razonabilidad al sustentarse en hechos falsos. En definitiva, no se pueden construir certezas a partir de simples probabilidades; b) deben ser plurales, es decir, la responsabilidad penal no se puede sustentar en indicios aislados; c) deben ser concomitantes al hecho que se trata de probar, es decir, con alguna relación material y directa con el hecho criminal y con el victimario; y d) deben estar interrelacionados entre sí, esto es, los indicios forman un sistema argumentativo, de tal manera que deben converger en una solución, pues la divergencia de alguno restaría eficacia a la prueba circunstancial en conjunto.*

Lo anterior, atendiendo al sistema de libre valoración de la prueba que rige en los procedimientos de responsabilidad administrativa, y en plena observancia de las reglas que aplican para los casos de violencia de género, ya que el dicho de la denunciante ha sido corroborado con diversos elementos de prueba y atendiendo a la prueba circunstancial de éstos pueden inferirse conclusiones consideradas sobre los hechos.

En este punto, es importante destacar que, aun y cuando la defensa pretende desestimar el testimonio rendido por [redacted], argumentando que el testigo [redacted] refirió una hipótesis incompatible con la acusación, al señalar no haber observado que se generara la agresión física materia de la presente controversia, esta negativa no es suficiente para introducir una duda razonable en cuanto a los hechos en cuestión, pues él mismo establece que "*me percate de que algo pasaba pues la compañera* [redacted] *comenzó a alterarse demasiado…sin saber yo en realidad lo que le había molestado*"

Es decir, con su testimonio se confirma que en esa oficina se suscitó un evento que el no observó y que tuvo como consecuencia una reacción de molestia por parte de [redacted], y, por tanto su dicho abona a la versión dada por la denunciante ante diversas autoridades, al ser compatible en las circunstancias, de lugar y momento de los hechos señalados por [redacted]

Así, tal como lo refiere la jurisprudencia[6] citada en el escrito de alegatos signado por el representante legal del presunto responsable, esta autoridad administrativa ha analizado con toda la buena fe que exige el principio el principio de presunción

[6] Tesis P./J. 9/2023 (11a.), con registro digital 2027849, de rubro **TESTIMONIO DE LA VÍCTIMA. CONDICIONES PARA EVALUAR SU VERACIDAD CUANDO EL DELITO OCURRE EN CONTEXTOS QUE ADMITEN TESTIMONIOS DE CORROBORACIÓN.**

Los siguientes datos son testados en cumplimiento de los artículos 33 fracciones VI, XI y XX, 38 fracción I, 71, 72, 77 fracción XVIII, 117 fracción III y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por lo que se testan los siguientes datos.

de inocencia y se concluye que, la versión alternativa de los hechos que pretende introducir la defensa en realidad corrobora los elementos de cargo presentados por la investigadora, entre los que también destaca las manifestaciones vertidas por [redacted], con lo que se corrobora la hipótesis de culpabilidad formulada.

El convencimiento que genera cada una de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se logra sin que haya lugar a una duda razonable respecto a la hipótesis que se sostiene en el IPRA, entendiéndose que esta se presenta, de acuerdo a lo que ha señalado[7] la Primera Sala de la Suprema Corte, en dos situaciones relacionadas con la existencia de pruebas de descargo: (i) cuando éstas confirman la hipótesis de la defensa, de tal manera que ellas acreditan una hipótesis total o parcialmente incompatible con la hipótesis de la acusación; y (ii) cuando a través de esas pruebas se cuestiona la credibilidad de las pruebas de cargo que sustentan la hipótesis de la acusación.

En la especie, tal como ya se anunció, si bien se pretendió introducir una hipótesis incompatible con la acusación, ésta la respalda; tampoco se puso en duda la credibilidad de las comparecencias realizadas ante la autoridad investigadora, por lo que las pruebas de cargo son suficientes para vencer la presunción de inocencia.

En ese tenor, se da cumplimiento al estándar probatorio de valoración de las pruebas de cargo y de descargo, contenido en la Jurisprudencia de rubro: **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL**

[7] Tesis 1a. CCXXI/2015 (10a.), con registro digital 2009467, de rubro **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SITUACIONES EN LAS QUE LAS PRUEBAS DE DESCARGO PUEDEN DAR LUGAR A UNA DUDA RAZONABLE.**

ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE Ddescargo[8].

En consecuencia, al concatenar la declaración de [redacted] ante el ***IMM***, y diversas autoridades, con las diversas constancias que obran en el expediente se arriba a la la convicción que los hechos imputados a ***El servidor público*** respecto de [redacted] se encuentran acreditados, por lo que se procederá a verificar si dichas conductas pueden subsumirse a la hipótesis normativa que se considera infringida.

SEXTA. - ANÁLISIS DE LA EXISTENCIA DE LA INFRACCIÓN

Una vez acreditada la existencia de los hechos imputados a ***El servidor público*** respecto de [redacted], lo que corresponde es verificar que éstos se subsuman a la hipótesis normativa que se considera infringida, la que, como ya se adelantó en la consideración cuarta es la obligación contenida en el artículo 49, fracción I, de la Ley General[9].

Por lo que, en aras de cumplir con el principio de tipicidad aplicable al derecho administrativo sancionador[10], se analizará si se actualizan los elementos que integran la falta en los términos que la autoridad investigadora realiza su imputación.

---

[8] Jurisprudencia número, 1a./J. 2/2017 (10a.), con registro digital 2013368.

[9] *Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:*
I. Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás Servidores Públicos como a los particulares con los que llegare a tratar, en los términos que se establezcan en el código de ética a que se refiere el artículo 16 de esta Ley;

[10] Tesis: P./J. 100/2006 de rubro: TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS, con registro digital 174326.

Los siguientes datos son testados en cumplimiento de los artículos 33 fracciones VI, XI y XX, 38 fracción I, 71, 72, 77 fracción XVIII, 117 fracción III y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por lo que se testan los siguientes datos.

Al respecto, se tiene que los elementos de la falta prevista en la fracción I del artículo 49 de la Ley General, atribuidos por la autoridad investigadora, son los siguientes: a) Que el acto sea cometido por un servidor público; b) Que el acto lo realice con motivo de las funciones o comisiones encomendadas; c) Que con su actuar deje de observar la disciplina y respeto en los términos del Códigos de ética, en específico los principios de respeto a los derechos humanos, legalidad y comportamiento digno, procediéndose al estudio de cada elemento.

A. Que el acto sea cometido por un servidor público

En primer término, se debe determinar si ***El servidor público***, tenía al momento de la realización de los hechos que se le imputan el carácter de servidor público.

Para ello, se estima que la autoridad investigadora acreditó con **La documental pública,** consistente en copia certificada del Nombramiento de Portillo Rojas Jesús José de fecha catorce de agosto de dos mil veintitrés, en el que se establece el alta de Portillo Rojas Jesús José en fecha primero de enero de dos mil nueve, como servidor público, Bombero 2° adscrito a la ***Subdirección***. Con lo que se comprueba que el señalado como presunto responsable es sujeto de la *Ley General* en términos de lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto de la *Constitución Federal*, 178, párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Chihuahua y 4, fracción I de la *Ley General* y, por tanto, el primer elemento que integra la falta que se imputa a ***El servidor público***, se tiene por acreditado.

B. Que el acto lo realice con motivo de las funciones, atribuciones o comisiones encomendadas

En este punto se analizará si las conductas de acción atribuidas en el IPRA ***El servidor público*** fueron cometidas con motivo de las funciones encomendadas.

Los siguientes datos son testados en cumplimiento de los artículos 33 fracciones VI, XI y XX, 38 fracción I, 71, 72, 77 fracción XVIII, 117 fracción III y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por lo que se testan los siguientes datos.

Bajo ese contexto, se estima necesario, en primer término, definir el vocablo *función,* mismo que de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, significa "Tarea que corresponde realizar a una institución o entidad, o a sus órganos o personas".

El servidor público quien funge como Bombero 2° adscrito a la ***Subdirección***, el día 26 de marzo de 2024 se encontraba en funciones, de conformidad con el acta circunstanciada de fecha veinticuatro de mayo de dos mil veinticuatro, en la que el [redacted] manifestó ante la autoridad investigadora:

"...En relación a los hechos ocurridos el día 26 de marzo del 2024, aproximadamente a las 09:00 am yo me encontraba en mi oficina ubicada en la estación numero 5 de bomberos, ubicada en avenida pacheco, Colonia 2 de octubre hablando por teléfono con el compañero Jesús José Portillo Rojas, quien se encontraba físicamente en calle cuarta y Urquidi colonia santa rosa, estación de bomberos 1, (en donde también se encuentra el área de estadística y archivo) pues es el encargado del área de maquinas y yo le estaba solicitando la admisión de una unidad al taller..."

Vinculando dicha documental pública con la manifestación de [redacted] ante el ***IMM:*** *"...El día de ayer, entre las nueve y media y diez y media de la mañana, estaba en la oficina del Coordinador de Logística..."*

Por lo que, al encontrarse ***El servidor público*** en su lugar de trabajo en ejercicio de sus funciones como Bombero 2do., y golpear con una carpeta a otra persona servidora pública en el área de los glúteos, se cumple con el componente conductual de la falta, por lo que el elemento en análisis se tiene por acreditado.

Los siguientes datos son testados en cumplimiento de los artículos 33 fracciones VI, XI y XX, 38 fracción I, 71, 72, 77 fracción XVIII, 117 fracción III y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por lo que se testan los siguientes datos.

C. Que con su actuar se deje de observar la disciplina y respeto en los términos que se establezcan en el Código de Ética

En este elemento se debe determinar si, tal como lo manifiesta la autoridad investigadora en su IPRA la actuación de ***El servidor público***, implica el incumplimiento a su obligación de observar disciplina y respeto, en los términos de los principios de respeto a los derechos humanos y legalidad, y al valor de comportamiento digno, previstos en el Código de Ética y Conducta de las Personas Servidoras Públicas del Municipio de Chihuahua, al haber ejercido violencia física en contra de [redacted]

Conforme al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el vocablo disciplina implica la obligación de observar las leyes y ordenamientos de la profesión o instituto, y el segundo, viene del latín *respectus* que significa 'atención' o 'consideración' y puede definirse como la consideración y valoración especial que se le tiene a alguien o a algo, al que se le reconoce valor social o especial deferencia. El respeto como valor significa preocuparse por el impacto de nuestras acciones en los demás.

El respeto constituye una de las reglas mínimas de comportamiento a las que se encuentra obligado todo servidor público en el ejercicio de las atribuciones que le son conferidas con motivo de su empleo, cargo o comisión, por lo que, si se traslada la premisa anterior al presente caso, se obtiene que, para que se acredite la infracción que se le imputa a la persona servidora pública involucrada, se debe comprobar que con su conducta dejó de observar las leyes relacionadas con las atribuciones que tenía conferidas con motivo de su cargo.

Los siguientes datos son testados en cumplimiento de los artículos 33 fracciones VI, XI y XX, 38 fracción I, 71, 72, 77 fracción XVIII, 117 fracción III y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por lo que se testan los siguientes datos.

En la especie, el hecho de golpear a una persona en el área de los glúteos, independientemente de si es con un objeto o con la mano durante el horario laboral, resulta contrario a la consideración y deferencia que se deben a otras personas por el simple hecho de serlas, y no solo eso, dejando de observar en su desempeño disciplina y respeto, tanto a las demás Personas Servidoras Públicas, como a los particulares con los que llegare a tratar.

Esto, sin que resulte una excluyente de responsabilidad el hecho narrado por el presunto responsable en el sentido de que confundió a su compañera con otra persona, ya que, la acción de golpear en los glúteos a un particular u otra persona servidora pública en horario laboral y en las instalaciones designadas para el ejercicio de sus funciones, es reprochable independiente del destinatario o resultado del mismo.

Así, resulta claro que ***El servidor público*** rompió con la seguridad y confianza que debe imperar en el lugar de trabajo, al golpear a una compañera en el área de los glúteos durante la jornada laboral de ambas personas servidoras públicas, ya que el respeto constituye una de las reglas mínimas de comportamiento a las que se encuentra obligado todo servidor público en el ejercicio de las atribuciones con que cuenta con motivo de su empleo, cargo o comisión, y además no se condujo con disciplina dado la inobservancia de las disposiciones convencionales, constitucionales, legales y reglamentarias que rigen su actuar.

Por consiguiente, el bien jurídico tutelado en materia de responsabilidades administrativas, es decir, el adecuado ejercicio del servicio público mediante la realización de la función encomendada dentro de los fines en que está comprendida, evidentemente no incluye el ejercer violencia en contra de otra persona servidora pública en el espacio laboral.

Los siguientes datos son testados en cumplimiento de los artículos 33 fracciones VI, XI y XX, 38 fracción I, 71, 72, 77 fracción XVIII, 117 fracción III y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por lo que se testan los siguientes datos.

Órgano Interno de Control
Calle Gómez Farías, No. 212, Col. Centro C.P 31000 Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 (614)200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx

Los siguientes datos son testados en cumplimiento de los artículos 33 fracciones VI, XI y XX, 38 fracción I, 71, 72, 77 fracción XVIII, 117 fracción III y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por lo que se testan los siguientes datos.

En consecuencia, la conducta desplegada no corresponde con los estándares que deben prevalecer en el comportamiento de los servidores públicos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7, fracción IV, de la Ley General, así como al contenido del Código de Ética, violentándose con ello, tal como lo afirmó la autoridad investigadora los principios de respeto a los derechos humanos, legalidad y la conducta relativa al comportamiento digno.

Al respecto, el Código de Ética, expresamente mandata a las y los servidores públicos municipales a no incurrir en violencia en contra de las mujeres y contribuir con la erradicación de estas conductas en el espacio laboral, público y familiar, función que en el caso concreto se acrecienta, dado que, el acto reprochado a ***El servidor público*** es completamente lo contrario a lo que se mandata en dicha norma.

Bajo ese contexto, resulta evidente que con su actuar ***El servidor público***, violentó el artículo 8, fracción I, del Código de Ética, ya que, al actuar de manera irrespetuosa, implicó una violación al estado de derecho, al dejar de cumplir con las normas jurídicas que conducen su comportamiento como servidor público.

Dichas disposiciones, se encuentran reguladas desde el artículo 109, fracción III de la Constitución Federal[11], así como en los artículos 6 y 7 de la Ley General[12] que

---

[11] Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:
III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones

[12] Artículo 6. Todos los entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable de cada servidor público.
Artículo 7. Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público.

obligan a los servidores públicos a actuar con pleno respeto al estado de derecho y contar con una actuación ética y responsable, traduciéndose la primera, de acuerdo al Código de Ética, en el conjunto de principios, valores, costumbres y normas de conducta, que deben ser practicados de un modo estrictamente racional y consciente, para justificar nuestros actos desde el punto de vista de lo correcto e incorrecto.

Mas aún, el estar sujeto al principio de legalidad implica dar cumplimiento a las normas que tienen por objeto erradicar la violencia, mismas que en el caso concreto evidentemente no fueron observadas y, por tanto, con su actuar contravino lo establecido por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem Do Para) la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo que desde luego implica, tal como lo señaló la autoridad investigadora el incumplimiento a la obligación que contempla el artículo 49, fracción I de la Ley General.

Es decir, es evidente que ***El servidor público*** dejó de observar disciplina y respeto en el desempeño de sus funciones, así como los principios contemplados en el Código de Ética, por lo que el elemento en estudio se tiene por acreditado.

Bajo este contexto, una vez que fueron descritas y valoradas las pruebas admitidas, en conjunto con lo evidenciado del resto de las constancias que obran en autos del expediente, así como de los argumentos vertidos por las partes, es posible para esta autoridad concluir que fue probado más allá de toda duda razonable la realización de los hechos atribuidos a ***El servidor público*** respecto a [redacted] y por ende se actualiza la falta administrativa imputada, al haberse acreditado cada uno de los

Los siguientes datos son testados en cumplimiento de los artículos 33 fracciones VI, XI y XX, 38 fracción I, 71, 72, 77 fracción XVIII, 117 fracción III y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por lo que se testan los siguientes datos.

Los siguientes datos son testados en cumplimiento de los artículos 33 fracciones VI, XI y XX, 38 fracción I, 71, 72, 77 fracción XVIII, 117 fracción III y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por lo que se testan los siguientes datos.

elementos de la misma, por lo que lo conducente es individualizar la sanción que se aplicará.

SÉPTIMA.- Individualización de la sanción.

I.Elementos a tomarse en cuenta

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley General, para la imposición de las sanciones a que se refiere el artículo 75 de la misma normativa, se deben considerar los elementos siguientes:

1. Cargo desempeñado, nivel jerárquico, antecedentes y antigüedad y en el servicio público. De autos se advierte que, ***El servidor público*** funge como Bombero 2do. Adscrito a la ***Subdirección***, de conformidad con la copia certificada del Nombramiento de ***El servidor público*** de fecha catorce de agosto de dos mil veintitrés, ofrecida por la autoridad investigadora.

En cuanto a su experiencia, obra en autos a foja 069, obra el Formato Único para Tramites de Personal de ***El servidor público,*** mediante el cual se acredita su ingreso a la Administración pública Municipal Centralizada desde el primero de febrero de dos mil cinco, por lo que válidamente se puede concluir que la persona infractora estaba en aptitud de conocer los alcances de sus funciones, así como que debía atender de forma estricta los principios que rigen su actuar.

Este elemento se valora en su perjuicio, toda vez que el puesto que desempeña en el servicio público, implica la calidad de garante de los derechos de las personas y servicios de emergencia.

2. Condiciones exteriores y los medios de ejecución. De conformidad con las constancias de autos, aun y cuando ***El servidor público*** se disculpó con

[redacted] al señalar que fue un error, esto no lo exime de responsabilidad, pues la conducta que se le reprocha, descarta cualquier posibilidad sobre la existencia de alguna causa de justificación y, por el contrario, se considera indeseable su proceder.

3. Reincidencia. De conformidad con el artículo 76, último párrafo, se considerará reincidente al que habiendo incurrido en una infracción que haya sido sancionada y hubiere causado ejecutoria, cometa otra del mismo tipo.

   Al respecto, de los registros que obran en el ***OIC***, se advierte que ***El servidor público,*** fue encontrado responsable por esta autoridad dentro del expediente 2024/OIC/PRA027 respecto del mismo tipo de falta que en este sumario se le atribuyó, imponiéndose una sanción de suspensión en el empleo por quince días naturales, por lo que para los efectos de individualización de la sanción se le considerará como reincidente y por tanto, de acuerdo al mismo precepto invocado la sanción a aplicar, no podrá ser igual o menor a la impuesta con anterioridad.

II. Sanción a imponer

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 75 de la *Ley General*, las faltas calificadas como no graves, ameritan las siguientes sanciones:

I. Amonestación pública o privada;
II. Suspensión del empleo, cargo o comisión; que podrá ser de uno a treinta días naturales.
III. Destitución de su empleo, cargo o comisión, y
IV. Inhabilitación temporal para desempeñarse en el servicio público la que no podrá ser menor de tres meses ni podrá exceder de un año

Los siguientes datos son testados en cumplimiento de los artículos 33 fracciones VI, XI y XX, 38 fracción I, 71, 72, 77 fracción XVIII, 117 fracción III y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por lo que se testan los siguientes datos.

Órgano Interno de Control
Calle Gómez Farías, No. 212, Col. Centro C.P 31000 Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 (614)200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx

Los siguientes datos son testados en cumplimiento de los artículos 33 fracciones VI, XI y XX, 38 fracción I, 71, 72, 77 fracción XVIII, 117 fracción III y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por lo que se testan los siguientes datos.

Además, dicho precepto faculta a los OIC a imponer una o más de las sanciones administrativas señaladas siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la trascendencia de la falta administrativa.

Esto se traduce en la necesidad de alcanzar la necesaria y debida proporción entre los hechos imputados y la responsabilidad exigida, dado que toda sanción debe determinarse en congruencia con la relevancia de la infracción cometida y según un criterio de proporcionalidad.

Este, constituye un principio normativo que se impone como un precepto más a las autoridades y limita el ámbito discrecional de la potestad sancionadora, por lo que se debe adecuar la sanción a las conductas cometidas, aplicando criterios valorativos descritos en la norma, así como aquellos inferibles de principios integradores del ordenamiento jurídico.

Es decir, para que se respete el principio de proporcionalidad indicado, resulta insuficiente que la sanción impuesta se encuentre dentro de los márgenes o límites legalmente establecidos, pues es necesario adecuarla a la infracción cometida.

En la especie, atendiendo a las consideraciones vertidas en el apartado anterior y, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 7, 49, fracción I, 75, fracción II, y 76 de la *Ley General* y 101 bis, fracción III, numeral 4, del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua, en uso de la facultad discrecional otorgada a esta autoridad resolutora para individualizar la sanción administrativa, y habiendo tomado en consideración los elementos objetivos y subjetivos tales como el carácter ***El servidor público*** al servicio de la ***Subdirección,*** la naturaleza de la falta cometida en contra de una servidora pública compañera de trabajo, la naturaleza de las funciones que desempeñaba, y el carácter de reincidente, se debe imponer

a la persona infractora la sanción consistente en **suspensión del empleo, cargo o comisión sin goce de sueldo por el periodo de treinta días naturales.**

Dicha sanción se impone dado que ***El servidor público*** cuenta con el carácter de reincidente, por lo que al habérsele impuesto en el expediente administrativo 2024/OIC/PRA027 la sanción consistente en suspensión en el empleo sin goce de sueldo por un periodo de quince días naturales, la que se emite en el procedimiento que se resuelve, no puede ser menor de esta.

Además, existe la necesidad de suprimir conductas como la cometida que, sin duda alguna, infringen el deber que se impone a los servidores públicos del municipio de Chihuahua de actuar en todo momento apegándose a los principios de respeto y legalidad, así como de disuadir la posible comisión de faltas similares en el futuro, por lo que la sanción se impone con base en una política de cero tolerancia frente a la violencia en contra de la mujer, tal como se desprende del código de ética, atendiendo al marco normativo que regula el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia y, en estricta observancia a lo dispuesto por el artículo 3 bis del Código Municipal.

OCTAVA. EJECUCIÓN

Esta sanción se ejecutará de inmediato, ello en términos de lo establecido en los artículos 208, fracción XI, 222 y 223 de la Ley General, por lo que deberá remitirse copia certificada de la presente resolución a la persona superior jerárquica del infractor y a la Subdirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor, a efecto de que sea agregada al expediente personal de la infractora y en el marco de sus atribuciones den cumplimiento a los resolutivos que derivan de la presente.

Atendiendo a lo anteriormente expuesto y fundado, se:

R E S U E L V E

PRIMERO. - Es existente la infracción objeto del presente ***PRA*** y se tiene por acreditada la responsabilidad de ***El servidor público*** al haber incumplido la obligación contenida en el artículo 49, fracción I, de la Ley General.

SEGUNDO. - Se impone a ***El servidor público*** la sanción consistente en **la suspensión del empleo, cargo o comisión sin goce de sueldo por el periodo de treinta días naturales;** la cual deberá ejecutarse de manera inmediata, en términos de lo establecido en los artículos 208, fracción XI, 222 y 223 de la Ley General.

TERCERO.- Una vez que cause estado la presente resolución, se inscribirá en el Registro de Servidores Públicos Sancionados, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, fracción XXII, 27 cuarto párrafo, de la Ley General y 48 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua.

CUARTO.- Remítase copia certificada de la resolución a la Subdirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor, así como a la ***Subdirección***, a efecto de que sea agregada al expediente personal de ***El servidor público*** y, que de conformidad con la normatividad aplicable en la materia, se cumplimente, hecho lo cual dichas autoridades deberán informar a esta autoridad, dentro del plazo de tres días, contados a partir de la notificación de esta resolución.

QUINTO.- Notifíquese personalmente a la persona infractora; por medio de oficio a la autoridad investigadora y para su conocimiento a las partes terceras

Los siguientes datos son testados en cumplimiento de los artículos 33 fracciones VI, XI y XX, 38 fracción I, 71, 72, 77 fracción XVIII, 117 fracción III y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por lo que se testan los siguientes datos.

interesadas, con fundamento en los artículos 116, 118, 193, fracción VI de la *Ley General*, 76 y 78 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua.

SEXTO. Cumplimentados los presentes resolutivos y, habiendo causado ejecutoria, archívese el expediente de cuenta como asunto total y definitivamente concluido, previos los registros correspondientes en el libro de gobierno del Área de Responsabilidades.

SÉPTIMO. - La presente resolución se encuentra para consulta de las partes, en el archivo de esta Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua, la cual puede ser consultada de lunes a jueves en un horario de 08:30 a 15:30 horas y los días viernes de 08:30 a 14:00 horas, exceptuando días inhábiles.

Así lo resolvió y firma, María de Lourdes Sigala Rodríguez, Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua, en su calidad de autoridad resolutora.

Chihuahua capital de trabajo y resultados

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Fecha de Clasificación: 05 de enero del 2026

Unidad Administrativa: Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua

Resolución definitiva del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 2024/OIC/PRA038

Confidencial: página 2, párrafo 1, renglón 2, párrafo 3, renglones 5 y 6, pagina 7, párrafo 4, renglones 3 y 6, pagina 8, párrafo 1, renglón 2, pagina 11, párrafo 4, renglones 2 y 8, pagina 12, párrafo 1, renglones 2, 3 y 5, párrafo 5, renglón 2, pagina 13, párrafo 1, renglón 2, pagina 16, párrafo 2, renglones 6 y 7, párrafo 3, renglón 3, pagina 20, párrafo 4, renglones 1 y 2, párrafo 6, renglón 1 y 2, pagina 21, párrafo 1, renglón 1, párrafo 2, renglón 1, 8 y 9, párrafo 3, renglones 1, 2 y 3, párrafo 5, renglones 1 y 3, pagina 22, párrafo 1, renglones 8 y 9, párrafo 2, renglón 1, párrafo 3, renglón 2, párrafo 4, renglón 1, pagina 23, párrafo 2, renglón 10, párrafo 3, renglón 2, párrafo 3, renglón 3, párrafo 4, renglones 1 y 2, pagina 24, párrafo 1, renglones 3 y 5, párrafo 2, renglón 4, párrafo 5, renglones 2, 4 y 7, pagina 26, párrafo 2, renglones 2, 3, 8, párrafo 3, renglones 3 y 5, pagina 27, párrafo 1, renglón 4, pagina 28, párrafo 1, renglones 1 y 3, párrafo 2, renglón 2, pagina 30, párrafo 2, renglón 4, párrafo 4, renglón 1, pagina 31, párrafo 2, renglón 7,pagina 34, párrafo 4, renglón 5, pagina 36, párrafo 1, renglón 1, - respecto a datos personales como lo son nombres y/o Iniciales de la víctima y personas servidoras públicas ajenas al procedimiento.

Fundamento Legal: Artículo 128 de la LTAIP de Chihuahua

Fecha del Acta de Sesión del Comité: 09 de enero del 2026

Numero de acuerdo: CT-ACI-001/2026

Sesión: CT-ASE-002/2026

Fecha de la sesión: 09/01/2026

Órgano Interno de Control
Calle Gómez Farías, No. 212, Col. Centro C.P 31000 Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 (614)200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx